

## SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023)

### SENTENCIA

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **ANGELA MARÍA SUESCÚN ARANGO**  
**Demandados** : **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.**  
**Radicado** : **05001 31 05 014 2016 01067 02**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y Subtemas** : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, contradicción del dictamen -.  
**Decisión** : Modifica decisión condenatoria de Primera Instancia  
**Sentencia No** : 008

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

## ANTECEDENTES

### Pretensiones:

Se solicita se declare la nulidad de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por las codemandadas y en su lugar, se declare que la demandante cuenta con el 57.45% de pérdida de capacidad laboral, según dictamen de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia; se condene al reconocimiento y pago de **pensión de invalidez de origen común**, retroactivo pensional, mesadas adicionales, **intereses moratorios**, costas procesales.

### Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que la demandante nació el día 10 de enero de 1967, ha cotizado al Régimen de Prima Media desde el 10 de octubre de 1993, contando con 872.14 semanas cotizadas a la presentación de la demanda; se ha desempeñado como Odontóloga vinculada con la Clínica Odontológica VID, cumpliendo funciones hasta el 12 de junio de 2014, fecha desde la cual fue incapacitada y no pudo volver a laborar; en septiembre de 2013 sufrió dos paros cardiorrespiratorios por reacción alérgica a medicamentos aplicados con ocasión de lumbalgia; el 12 de diciembre de 2014 cuando habían transcurrido 180 días de incapacidad, el reumatólogo y el internista emitieron pronóstico desfavorable de recuperación por *artritis reumatoide severa agresiva*.

Fue valorada por **COLPENSIONES** el 16 de enero de 2015 asignándole el **36.61%** de pérdida de capacidad laboral (PCL) con fecha de estructuración 12 de diciembre de 2014, por los

diagnósticos *artritis reumatoide, hipertensión arterial y lumbalgia*; por su parte, la **Junta Regional** de Calificación de Antioquia mediante dictamen del 5 de junio de 2015, la calificó con el **40.11%** de PCL e igual fecha de estructuración, incluyendo además de los anteriores, el diagnóstico *síndrome de ojo seco*; decisión revisada por la **Junta Nacional** de Calificación de Invalidez el 28 de enero de 2016, asignándole el **43.11%** de PCL, con igual fecha de estructuración, origen y diagnósticos.

Expone que posteriormente, la Médica Siquiatra tratante le diagnosticó ***depresión moderada severa*** el cual fue incluido en valoración realizada por la **Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia** el 10 de junio de 2016, donde fue calificada con el **57.45%** de PCL de origen común, estructurada el 6 de abril de 2016. Desde julio de 2015 la demandante es paciente *inmunosuprimida*, con alto riesgo de contraer infecciones debido al uso de medicamentos biológicos, lo cual está registrado en la historia clínica, por lo que no puede permanecer en ambientes propensos a la contaminación, como clínicas y hospitales.

### **Respuesta a la demanda:**

**COLPENSIONES** a través de apoderada judicial, aceptó lo referente a los dictámenes emitidos por las diferentes entidades, anotando que por parte de la Facultad Nacional de Salud Pública se incluyeron nuevos diagnósticos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones denominadas inexistencia de causal de nulidad de dictamen, inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales, petición antes de tiempo, improcedencia de intereses moratorios, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas.

Por su parte, la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** a través de apoderado, admitió el contenido del dictamen emitido, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y formuló en su defensa la excepción que denominó inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones.

A su vez, el apoderado de la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ** aceptó la emisión de los dictámenes, se opuso a las pretensiones formuladas y propuso como excepciones las denominadas legalidad de la calificación emitida, variación en la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen emitido, inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen, buena fe, genérica.

#### **Sentencia de Primera Instancia:**

El **Juzgado Catorce Laboral** del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 16 de febrero de 2022, declaró la nulidad de los dictámenes emitidos por las entidades codemandadas, declarando que la señora Ángela María Suescún Arango tiene una pérdida de capacidad laboral del 57.45% de origen común, estructurada el 10 de julio del año 2015, conforme al dictamen realizado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia; **condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar pensión de invalidez de origen común**, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la Sentencia, la cual deberá calcular de conformidad con los parámetros establecidos en los artículos 21 y 40 de la Ley 100 de 1993, cuyo **retroactivo** se causa a partir del **10 de julio del año 2015**, en razón de 13 mesadas pensionales al año, sin perjuicio de los incrementos legales anuales; condenó al pago de

**indexación** sobre mesadas pensionales a partir del 10 de julio de 2015 y sobre cada mesada causada, hasta cuando se efectúe el pago de la obligación; autorizó efectuar los descuentos del retroactivo pensional con destino al Sistema de Salud. Costas a cargo de COLPENSIONES, agencias en derecho en cuantía equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la demandante.

### **Recurso de Apelación apoderada de COLPENSIONES:**

**Solicita se revoque la Sentencia de Primera Instancia y se absuelva a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra**, afirmando que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez calificó la pérdida de capacidad laboral de la demandante, con el 43.11%, de origen común; expone que la Junta Nacional es el máximo órgano en materia administrativa legitimada por la norma para proferir el dictamen de merma de capacidad laboral, siendo determinado en última instancia a la peticionaria, razón por la cual ya **se encuentra en firme el dictamen**.

### **Alegatos de conclusión:**

La apoderada de COLPENSIONES reiteró argumentos expuestos en el trámite de primera instancia y al sustentar el recurso de apelación.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

## CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación** y se conocerá en **Consulta** en favor de COLPENSIONES; de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15, 66 A y 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y Providencias de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia AL2912 del 11 de julio de 2018 Radicación 68716, AL469 del 3 de febrero de 2016 Radicado 71896, STL-7382 del 9 de junio de 2015 Radicado 40200, M.P. doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

### **Conflicto Jurídico:**

**El asunto a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si el dictamen emitido en sede administrativa se encuentra en firme, al haberse emitido en última instancia por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. En favor de COLPENSIONES se revisará en Consulta las demás condenas.**

**Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente modificar la Sentencia de Primera Instancia;** por las siguientes razones:

**En el asunto bajo estudio está por fuera de discusión en esta segunda instancia,** que la señora Ángela María Suescún Arango nació el día 10 de enero de 1967 y cuenta con 56 años de edad (fl 220), según historia laboral generada por COLPENSIONES el 16 de agosto de 2016, contaba para esa fecha con 872.14

semanas cotizadas (fl 214); en sede administrativa le fueron emitidos los siguientes dictámenes de pérdida de capacidad laboral:

Entidad	Porcentaje	Origen	Diagnósticos	Fecha de estructuración	Fecha del dictamen	Folios
COLPENSIONES	36.61	Común	Hipertensión arterial, lumbalgia, AR	12/12/2014	16/01/2015	23-26
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia	40.11	Común	Artritis reumatoide seropositiva, hipertensión arterial, lumbalgia, ojo seco	12/12/2014	05/06/2015	35-38
Junta Nacional de Calificación de Invalidez	43.11	Común	Artritis reumatoide seropositiva, hipertensión arterial, lumbalgia, ojo seco	12/12/2014	28/01/2016	48-53

En lo referente a las **entidades facultadas** por el ordenamiento jurídico **para emitir dictamen de pérdida de capacidad laboral**, tenemos que **el artículo 41 de la Ley 100 de 1993** modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, contempla que corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones **-COLPENSIONES-**, a las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP hoy ARL-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral, calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; **pudiéndose controvertir ante las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional y nacional**, indicando expresamente que **contra dichas decisiones proceden las acciones legales.**

Sobre la **contradicción del dictamen de pérdida de capacidad laboral**, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SL1044 de 2019 Radicación 68074, reiterando CSJ SL5280-2018 y CSJ SL16374-2015, **indicó que el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez no es prueba solemne**, de modo que puede ser controvertido ante los Jueces del Trabajo y que **no es un requisito de procedibilidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez agotar el trámite ante dichas Juntas**, ya que **la parte interesada puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral, donde puede solicitar una nueva valoración**, para que **sea el Juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente**, a efectos de resolver sobre la pretensión demandada; veamos:

*“...la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez, sean regionales o nacionales, no son pruebas solemnes, de modo que pueden ser controvertidas ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas.*

*(...)*

*Así las cosas, el ejercicio de los recursos previstos en el decreto en cita contra los dictámenes que profieren las juntas de calificación de invalidez, no es el único medio con que cuenta la parte contra la cual se pretenda hacer valer, para oponerse y disentir de su contenido, puesto que también puede controvertirlo ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, dentro del proceso, puede hacer uso de la solicitud de una nueva valoración, para que sea el juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión deprecada...”.*

Así mismo, en **Sentencia SL877 de 2020** el Órgano de Cierre de la especialidad laboral, señaló que al no exigir la ley determinado elemento de persuasión para acreditar la pérdida de capacidad laboral, **debe respetarse la libertad probatoria de la que están asistidos los juzgadores de instancia**; explicando que si el Juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, podrá escoger para fundamentar su decisión, aquél que le merezca mayor credibilidad.



**Sobre lo que es objeto de apelación, la apoderada de COLPENSIONES sostiene que** *la Junta Nacional es el máximo órgano en materia administrativa legitimada por la norma para proferir el dictamen de merma de capacidad laboral, siendo determinado en última instancia a la peticionaria, razón por la cual ya **se encuentra en firme el dictamen.***

Al respecto, **el Juez de Primera Instancia explicó en términos generales**, que había lugar a declarar la invalidez de la demandante, **dando validez al dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia**, entidad que mediante valoración de fecha 10 de junio de 2016, le asignó el **57.45%** de pérdida de capacidad laboral de origen común, estructurada el 6 de abril de 2016, teniendo en cuenta los diagnósticos *artritis reumatoide clase III, hipertensión arterial, síndrome doloroso de columna, depresión clase I* (fls 16 a 21); indicando que aporta medios de convicción técnico científicos para orientar el convencimiento en cuanto a la pérdida de capacidad laboral, encontrando factible y lógico que se valore la artritis en clase III, ya que presenta compromiso de otros órganos, además que los tratamientos no tuvieron éxito en el manejo del dolor, la limitación en la movilidad es alta, presenta alta exposición a adquirir infecciones, con un desplazamiento deficiente; detalló que por la progresividad de las patologías especialmente la lumbalgia y la artritis, es lógico que las actividades como el cuidado de la persona, locomoción, disposición del cuerpo y la destreza, hayan sido objeto de aumento en el puntaje asignado, máxime que se trata de persona cuyo desempeño profesional es en el área de odontología.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral, que la conclusión a la que arribó el juzgado es razonable y atiende a la evidencia científica proporcionada por el dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública, teniendo en cuenta la situación más actual respecto a la evolución de las enfermedades

registradas en la historia clínica de la demandante; sin que le asista razón a la apoderada de COLPENSIONES, toda vez que como se indica en la normatividad y jurisprudencia citadas, los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez pueden ser controvertidos ante el Juez Laboral y el hecho de haberse agotado el trámite correspondiente en sede administrativa, no quiere decir que sean inmodificables, pues es sabido que el estado de las patologías puede variar con el transcurso del tiempo.

Si bien es cierto, el ordenamiento jurídico faculta a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral como COLPENSIONES y a las Juntas de Calificación de Invalidez, para emitir calificación de pérdida de capacidad laboral; también lo es, que su competencia no excluye otras formas de demostrar ese hecho, pudiendo la parte interesada allegar un dictamen con la demanda, como ocurrió en este caso y tampoco se exige como requisito de procedibilidad haber acudido ante las Juntas de Calificación de Invalidez, pues existe libertad probatoria conforme al artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el cual se somete a contradicción y valoración probatoria conforme a las reglas procesales aplicables; pudiendo la parte demandada allegar también su propio dictamen.

Observándose que en la actuación procesal desarrollada en el trámite de Primera Instancia, se garantizó el derecho de contradicción frente al dictamen aportado con la demanda, fue sustentado por la Perito doctora Martha Lucía Escobar Pérez Perito, quien es profesional en Medicina, especialista en Salud Ocupacional y Ergonomía, Magister en Salud Pública, Docente de la Facultad de Medicina Universidad de Antioquia, con experiencia de 20 años en la Facultad Nacional de Salud Pública de la misma Universidad realizando valoraciones de invalidez; oportunidad procesal en la que se indagó a la profesional de la

salud acerca del contenido y los fundamentos del dictamen emitido, haciéndose referencia a la progresividad que presenta la afectación por artritis reumatoide (sustentación que posibilita el artículo 228 del Código General del Proceso aplicable por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social).

Así mismo, COLPENSIONES dentro del término de traslado para presentar la respuesta a la demanda y proponer excepciones, contó con la posibilidad de oponerse a la experticia presentada por la demandante y también pudo aportar otro dictamen, conforme lo habilita el artículo 228 citado.

**No encontrando esta Sala de Decisión Laboral razones objetivas para desconocer el estado de invalidez de la demandante**, conforme a los resultados plasmados en el dictamen tenido en cuenta en Primera Instancia y tampoco se aportaron por la parte demandada, pruebas que controviertan tales conclusiones; tratándose de prueba puesta en conocimiento, se dio el correspondiente traslado y se contó con la oportunidad procesal para oponerse.

Así mismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 232 del Código General del Proceso, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, conforme al cual, “...**El juez apreciará el dictamen** de acuerdo con las reglas de la sana crítica, **teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos**, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso...” (Negritas fuera de texto); tal como explicó la Juez de Primera Instancia.

Por lo explicado, se **confirmará** la Sentencia de Primera Instancia en cuanto declaró el estado de invalidez de la

demandante, con fundamento en el dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia que le asignó el 57.45% de pérdida de capacidad laboral de origen común.

En Consulta en favor de COLPENSIONES se revisan las demás condenas impuestas, encontrando que la demandante cumple los requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez de origen común, según lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, toda vez que **cuenta con 880.71 semanas cotizadas** entre el 27 de octubre de 1993 y el 30 de septiembre de 2016, según historia laboral generada el 1° de noviembre de 2016 (expediente administrativo CD 2), **de las cuales, 154 fueron cotizadas en los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración**, entre el 6 de abril de 2013 y el mismo día y mes de 2016; con derecho a trece (13) mesadas al año, por haberse causado la pensión en forma posterior al 31 de julio del año 2011, según lo dispuesto en el inciso 8° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

**Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente, modificar la fecha del disfrute de la pensión de invalidez**, pues conforme a lo dispuesto en inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993, la pensión de invalidez comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado y en este caso, la fecha de estructuración fijada en el dictamen de la Facultad Nacional de Salud Pública corresponde al **6 de abril de 2016** “...cuando reumatólogo define *artritis reumatoide con compromiso de otros órganos y sistemas (clase III)*...”, fecha que fue confirmada por la Perito al sustentar el dictamen en audiencia (folio 21 archivo 03, minutos 12:00 y 13:20 archivo 24)

y **no el 10 de julio del año 2015** como se indicó en Primera Instancia, fecha en la que aparece registrada consulta con Medicina Interna U.P.B. (fl 126 archivo 03), pero que no corresponde a la estructuración determinada en el dictamen acogido.

**Prescripción:** No operó prescripción sobre mesadas pensionales (el derecho a la pensión no prescribe), toda vez que, **en el caso de la pensión de invalidez, el término de prescripción empieza a correr desde cuando queda en firme la ‘determinación’ de la invalidez laboral**, como lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en Sentencias SL1562 del 30 de abril de 2019 Radicado 73026, SL4174 de 2018 Radicado 53441, SL5703 de 2015 Radicado 53600, entre otras y en este caso, el dictamen tenido en cuenta es de fecha 10 de junio de 2016, radicando demanda el 12 de septiembre del mismo año; así mismo, el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez fue emitido el 28 de enero de 2016; sin que transcurrieran tres (3) años en ese lapso, como dispone el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Siendo procedente la condena por **indexación** impuesta, como mecanismo que permite compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, causado por el fenómeno inflacionario.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **modificar** la Sentencia de Primera Instancia en cuanto a la fecha del disfrute de la pensión de invalidez reconocida a la demandante, confirmándose en lo demás, incluyendo lo relativo a la condena en Costas.

### **COSTAS:**

**Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia** a cargo de COLPENSIONES, al no haber prosperado el recurso de apelación formulado, fijándose como agencias en derecho un (1) salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000) a favor de la demandante; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### **RESUELVE**

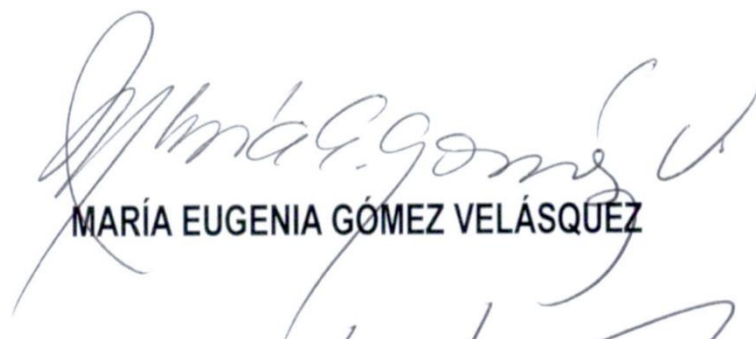
**PRIMERO:** Se **MODIFICA** la Sentencia de Primera Instancia de la fecha y procedencia conocidas que por vía de Apelación se revisa y en el grado jurisdiccional de Consulta en favor de COLPENSIONES, en cuanto a la **fecha del disfrute de la pensión de invalidez** reconocida a favor de la demandante ANGELA MARÍA SUESCÚN ARANGO, que será a partir de la fecha de estructuración de la invalidez el día **6 de abril de 2016** (no 10 de julio de 2015); de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

**SEGUNDO:** Se **CONDENA en Costas en esta Segunda Instancia** a cargo de COLPENSIONES, fijándose como agencias en

derecho un (1) salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000) a favor del demandante ANGELA MARÍA SUESCÚN ARANGO; como quedó explicado en la parte motiva.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, por el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SECRETARIA SALA LABORAL  
EDICTO VIRTUAL**

**HACE SABER:**

**Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:**

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **ANGELA MARÍA SUESCÚN ARANGO**  
**Demandados** : **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.**  
**Radicado** : **05001 31 05 014 2016 01067 02**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y Subtemas** : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, contradicción del dictamen -.  
**Decisión** : Modifica decisión condenatoria de Primera Instancia  
**Sentencia No** : 008

**FECHA SENTENCIA:**

31 de enero de 2023

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Fijado hoy miércoles 1 de febrero de 2023 a las 8:00 Am Desfijado hoy  
miércoles 1 de febrero de 2023 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

**RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS**  
**Secretario**